



Consejo Económico y Social

Distr. general
17 de octubre de 2013
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

48º período de sesiones

Acta resumida de la décima sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 4 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

- a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (*continuación*)

Tercer informe periódico de Nueva Zelandia (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes

a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Nueva Zelandia (continuación) (E/C.12/NZL/3; E/C.12/NZL/Q/3 y Add.1; HRI/CORE/NZL/2010)

Artículos 6 a 9 (continuación)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Nueva Zelandia toma asiento a la Mesa del Comité.*

2. **La Sra. Power** (Nueva Zelandia), en respuesta a una pregunta anterior del Sr. Marchán Romero, afirma que los padres no tienen derecho a la ventaja adicional de los créditos tributarios cuando ya han solicitado la licencia parental, que se paga a una tasa de remuneración superior.

3. En relación con la falta de datos desglosados sobre la discapacidad, dice que, si bien se suele realizar una encuesta sobre discapacidad cada cinco años, en 2011 tuvo que posponerse por el terremoto de Canterbury. La encuesta social general no incluye datos desglosados sobre discapacidad. En su informe al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva Zelandia ha expresado su compromiso de mejorar los mecanismos de aplicación de la política destinada a las personas con discapacidad.

4. **El Sr. Keith** (Nueva Zelandia) manifiesta que, si bien el Gobierno está de acuerdo con el espíritu general del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Nº 87) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e incluso la propia legislación sobre las relaciones laborales hace referencia a dicho texto, Nueva Zelandia no puede ratificar el Convenio porque su legislación no permite la huelga de solidaridad ni la huelga por determinadas cuestiones sociales o económicas sin multas. El Gobierno tampoco puede ratificar el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169), porque los grupos indígenas de Nueva Zelandia se oponen a la adhesión a dicho instrumento.

5. Los datos de desempleo y subempleo que constan en el tercer informe periódico no se miden en términos de las personas que buscan trabajo activamente, como sucede con los datos de la OIT, sino que se usa una base más amplia que incluye categorías de población como trabajadores desanimados o las personas que trabajan en casa. Por eso, la cifra del 25% de tasa de desempleo es artificialmente elevada. El espectacular aumento del gasto en infraestructuras del 7 al 27%, tal y como se presenta en el cuadro 10 del documento básico, tampoco es representativo, puesto que es consecuencia de una transferencia única de activos de infraestructura para el transporte por carretera a una agencia gubernamental independiente.

6. **El Sr. Smith** (Nueva Zelandia) declara que la Ley de reforma de las relaciones laborales de 2010 confiere fuerza de ley a los convenios de trabajo, lo que garantiza una jornada laboral no superior a 40 horas durante 5 días a la semana y otorga a la Inspección General de Trabajo la responsabilidad de supervisar los convenios y comprobar que los empleadores los han suscrito.

7. La Ley de salud y seguridad en el empleo de 2002 define explícitamente los conceptos de "daño" y "riesgo" para incorporar la idea de la fatiga física y mental y exige que los empleadores eviten que los empleados sufran tal daño. El Departamento del Trabajo regula el horario de trabajo y determina los niveles de fatiga en muchos sectores

económicos por medio de códigos deontológicos y directrices, si bien el sector del transporte se rige por los correspondientes códigos de transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera.

8. Si el trabajo representa un daño o un riesgo excesivos, la Inspección General de Trabajo es competente para notificar la prohibición, mientras que los trabajadores pueden declararse en huelga con carácter inmediato.

9. La Ley de reforma de las relaciones laborales de 2010 especifica las funciones de la Inspección General de Trabajo en una forma que aborda el desequilibrio inherente en las competencias de la Inspección que se manifiesta en que puede entrar en los edificios e incautarse de documentos pero no puede obligar al cumplimiento de los convenios. En algunos casos, como en el de impago de salarios, podía dirigirse a los empleadores para exigir una reparación, pero estos solían alargar el proceso y a veces los empleados tenían que esperar entre 12 y 18 meses para obtener satisfacción. Algunos de los nuevos mecanismos para garantizar las prestaciones mínimas que prevé la Ley son: la firma de compromisos voluntarios vinculantes entre el empleador y la Inspección General de Trabajo para corregir infracciones en el lugar de trabajo; las modificaciones de mejoras en virtud de las cuales la Inspección General de Trabajo especifica las medidas que debe adoptar el empleador para cumplir la Ley; la duplicación de las sanciones económicas en caso de que no se respeten las prestaciones mínimas; la imposición de un interés de demora por los impagos a los empleados y la no negociabilidad de las prestaciones mínimas. No se prevén mecanismos especiales para las reclamaciones derivadas de la diferencia salarial por razón de sexo, pero la cuestión puede resolverse mediante las vías mencionadas anteriormente y es objeto de numerosas resoluciones judiciales e iniciativas públicas y privadas.

Artículos 10 a 12

10. **El Sr. Dasgupta** dice que, pese al considerable descenso del consumo de tabaco en los últimos diez años, el 23,5% de la población sigue fumando, con tasas de adicción especialmente altas en zonas habitadas por indígenas. Pregunta si el plan quinquenal de control del tabaco en Nueva Zelandia 2004-2009 ha sido un éxito y se interesa por las nuevas medidas que ha adoptado el Gobierno.

11. **El Sr. Riedel** desea saber qué medidas específicas se han tomado para asistir a los grupos marginados que no se pueden permitir el suministro de agua público, más que nada porque pueden acabar recurriendo al suministro ilegal de agua contaminada. Según el informe, el 33% de los sistemas comunitarios de alcantarillado en las pequeñas poblaciones están funcionando con deficiencias; en este sentido, el Comité quisiera saber qué medidas se han adoptado para remediar esta situación. Asimismo, fuentes de la sociedad civil indican que los niños isleños del Pacífico tienen nueve veces más probabilidades de ser hospitalizados por enfermedades bronquiales que los niños neozelandeses de origen europeo, y existen las mismas diferencias en mortalidad infantil entre los maoríes y los pakeha: ¿qué medidas prevé el Gobierno para corregir esta situación? La delegación podría también aclarar qué acciones se han emprendido para aliviar la dificultad a la que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual para acceder a determinados servicios.

12. Señala que varias referencias a programas a lo largo del informe no vienen acompañadas de mención alguna a los resultados, objetivos y experiencias adquiridas, como sucede con el programa de detección del cáncer de cuello del útero, el Plan de acción sobre la salud de los maoríes y el Examen de la Mortalidad Perinatal y Materna de 2005. También agradecería información más detallada sobre los resultados de los programas de salud mental mencionados en el párrafo 505 del informe y sobre los programas de tratamiento y salud mental de los reclusos y solicitantes de asilo en lo que se refiere a

factores como la disponibilidad de servicios de salud y el tiempo de espera para recibir atención médica.

13. **El Sr. Ribeiro Leão**, tomando nota de la amplia diversidad de políticas puestas en marcha por el Gobierno para erradicar la pobreza, pregunta si el Gobierno ha estudiado la posibilidad de trazar un plan unificado para combatir la pobreza que agrupe todas las políticas.

14. **El Sr. Martynov** solicita más información sobre la disponibilidad de centros de atención de menores asequibles para niños de hasta 6 años.

15. **La Sra. Cong Jun** elogia al Gobierno por sus esfuerzos por reducir la violencia doméstica promoviendo la colaboración entre la policía y los defensores de los niños y adultos víctimas de la violencia, pero pregunta si existen programas para enseñar a la policía a no ser excesivamente contundente. También pregunta qué recomendaciones ha formulado en su último informe de 2009 el Equipo de trabajo para la acción sobre la violencia sexual en materia de justicia penal y si el Gobierno las ha seguido.

16. **El Sr. Schrijver** observa que la educación es obligatoria en Nueva Zelandia hasta los 16 años, pero la legislación no establece una edad mínima para trabajar, a pesar de que el país es parte en el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Nº 182), de la OIT. ¿Es posible que haya una relación entre la gran cantidad de estudiantes que abandonan los estudios, en particular de niños maoríes, y la elevada tasa de trabajo infantil? Asimismo, si bien Nueva Zelandia es un país desarrollado, muchos niños viven en condiciones de pobreza. Por eso, se pregunta hasta qué punto las medidas del Gobierno son eficaces para acabar con la pobreza infantil, el abandono escolar y el trabajo infantil.

17. **El Sr. Sadi**, celebra que todos los niños de Nueva Zelandia tengan derecho a la educación con independencia de su estatus migratorio, pero pregunta si también gozan de cobertura médica y, en un sentido más general, si el seguro médico cubre la atención odontológica. Agradecería también información sobre los planes para ofrecer viviendas sociales dignas a las personas que viven en las zonas rurales, puesto que es frecuente el caso de indígenas que habitan en viviendas que no cumplen los requisitos de habitabilidad, saneamiento y acceso al agua.

18. **El Sr. Abdel-Moneim**, tras señalar que el artículo 11 del Pacto hace referencia no solamente a una alimentación, vestido y vivienda adecuados sino también a la mejora continua de las condiciones de existencia, pregunta cómo ha intentado mejorar el Gobierno las condiciones de vida ante las fluctuaciones del índice de precios al consumo. Si bien la disparidad de ingresos no es en sí misma negativa, es preocupante. Por ello, desearía conocer el enfoque adoptado por el Gobierno en relación con la política impositiva para responder a la creciente disparidad de ingresos en las últimas décadas.

19. **El Sr. Kedzia** (Relator para el país) dice que el informe menciona una serie de programas, pero no describe ni su repercusión ni sus logros. Se necesita disponer de más información sobre la campaña cuatrienal contra la violencia familiar; los programas contra la pobreza; la Estrategia de prevención de suicidios de Nueva Zelandia (2006-2016); y las medidas introducidas para mejorar los servicios de salud en zonas rurales alejadas, tema ya mencionado en las observaciones finales del Comité en 2003.

20. **El Presidente**, interviniendo en calidad de miembro del Comité y en referencia al caso de una mujer desahuciada por no poder hacer frente a los aumentos del alquiler de su vivienda pregunta qué remedios judiciales o de otra índole ha tenido a su disposición la víctima en cuestión y qué ha sido de ella. A pesar de la recomendación formulada por el Comité en 2003 en el sentido de que el Estado parte debe dar pleno efecto al Pacto en su ordenamiento jurídico, su caso no fue admitido a trámite y no pudo recurrir a los tribunales de derechos humanos, puesto que estos no tenían competencia en la materia.

Unas 6.000 personas no se pueden permitir una vivienda y 3.000 viven en condiciones de hacinamiento y, sin duda, la situación se ha deteriorado a raíz del terremoto de Christchurch. Por eso, agradecería disponer de más información sobre las medidas destinadas a abordar la falta de viviendas sociales y las necesidades de vivienda de las víctimas, especialmente de los grupos maoríes y otros grupos desfavorecidos.

21. **La Sra. Power** (Nueva Zelanda) manifiesta que en su país hay un diálogo significativo sobre la cuestión del suicidio, dado que Nueva Zelanda presenta la tasa de suicidios de jóvenes adultos más alta en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la tercera más alta en el caso de las mujeres. La labor del Gobierno para reducir las tasas de suicidio se basa en la Estrategia de prevención de suicidios de Nueva Zelanda (2006-2016), que contiene una amplia gama de iniciativas, tales como la introducción de servicios de salud mental y de tratamiento de las adicciones de niños y jóvenes, los servicios virtuales y de mensajería de texto para jóvenes con depresión y el asesoramiento y apoyo telefónico. Se han destinado 62 millones de dólares a un conjunto de medidas para la prevención del suicidio juvenil que se desplegarán en la red, las escuelas, las familias y las comunidades, así como en el sistema de salud, de modo que las enfermeras y los trabajadores sociales que están en contacto con los jóvenes en las escuelas de los grados inferiores puedan identificar a los estudiantes con alguna enfermedad mental y ofrecerles la atención necesaria. Asimismo, se prevé instaurar un programa de comportamientos positivos para mejorar los entornos de aprendizaje en las escuelas, aumentar la financiación de la atención de salud primaria y mental, fijar nuevos objetivos para estos servicios y adoptar un enfoque basado en la familia. Aunque extraer conclusiones de las tasas de suicidio entre las minorías podría inducir a error por el reducido número de personas implicadas, resulta significativo que, en 2009, entre los grupos del Pacífico, la causa de la muerte de uno de cada tres hombres es el suicidio.

22. Afirma que Nueva Zelanda no cuenta con un sistema de salud basado en seguros privados, aunque muchas personas optan por estos seguros para tener una mayor cobertura. Los solicitantes de asilo y los migrantes tienen también acceso al sistema público de salud. La atención odontológica cosmética corre por cuenta de cada persona salvo que su salud esté en riesgo, en cuyo caso el Estado puede sufragar los costes.

23. La agencia estatal Housing New Zealand ofrece la mayor parte de viviendas sociales y posee un 15% de todo el mercado de alquiler. Los arrendatarios pagan un alquiler que no supera el 15% de sus ingresos. Housing New Zealand lleva funcionando muchos años y, por eso, hay casos de arrendatarios que se benefician de viviendas sociales subvencionadas incluso después de que su situación haya mejorado. El año pasado, el Gobierno también aportó unos 1.200 millones de dólares a los suplementos de vivienda de la seguridad social para cubrir los costes de hipotecas o alquileres. Aproximadamente el 45% de quienes reciben viviendas sociales y el 25% de los beneficiarios de los suplementos de vivienda son maoríes. Algunas casas de maoríes no reúnen las condiciones mínimas, unas veces porque las tierras son propiedad de las familias pero estas no las mantienen al haberse mudado, y otras veces porque la tierra pertenece a varias personas, lo que dificulta la mejora de las tierras maoríes y la edificación en ellas.

24. Se han prestado diversos servicios a las víctimas del terremoto de Canterbury en los centros temporales de protección civil y emergencias y en el servicio de alojamiento de afectados por el terremoto de Canterbury. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también trabajan para definir y resolver las necesidades más específicas de las víctimas. A fin de alentar el crecimiento en la zona del terremoto, el Gobierno ha garantizado el pago de los seguros de unas 7.000 casas situadas en zonas donde la destrucción fue casi total o donde la tierra perdió su utilidad. Se abonaron casi 100.000 pagos de emergencia y protección civil para ayudar a las personas a resolver sus necesidades de vivienda y se

habían pagado otros 203 millones de dólares a empleados y empleadores para estimular la actividad empresarial tras los daños provocados por el seísmo.

25. Se han incluido medidas contra el tabaquismo entre los seis objetivos a los que el Gobierno destina su gasto en sanidad, y, a pesar de que los maoríes no son uno de los colectivos a los que se destinaban las medidas, se han introducido en las comunidades maoríes y del Pacífico programas para dejar de fumar, como el tratamiento de sustitución con nicotina. La campaña "Smoking Not Our Future" da a conocer los peligros del tabaco mediante mensajes difundidos por personajes conocidos entre los adolescentes. Los resultados de un estudio de 2010 indican que las tasas generales de consumo de tabaco entre los jóvenes ha descendido un 1,5% en tan solo un año. La Ley contra el tabaco de 2011 aumentó el número de espacios sin humo y limitó el número de lugares en los que se podían mostrar productos relacionados con el tabaco; además, muchas iwi han prohibido fumar en espacios públicos y los pastores han difundido mensajes contra el tabaco en las comunidades del Pacífico. Para julio de 2012, el Gobierno tiene la intención de ofrecer asesoramiento y servicios de salud al 95% de los fumadores hospitalizados y al 90% de los fumadores regulares.

26. **El Sr. Keith** (Nueva Zelanda) dice que la resolución judicial a la que hizo referencia el Presidente se remonta a casi 15 años y que desde entonces los tribunales vienen haciendo una interpretación más amplia de los derechos económicos, sociales y culturales. El caso no fue consecuencia de una denuncia individual, sino que cuestionaba la política sistemática de introducir alquileres a precio de mercado para las viviendas sociales. El tribunal no declaró inadmisibile el caso, sino que concluyó que el Gobierno intentaba lograr un equilibrio al modificar el criterio del apoyo directo en función del ingreso y ofrecer una vivienda alternativa o apoyo económico.

27. Las autoridades locales pueden gravar el agua al igual que las carreteras, bibliotecas y otros servicios públicos, pero se prevén excepciones para las personas en situación de dificultad y, si procede, se pueden conceder subvenciones de ayuda en caso de emergencia. El Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado una estrategia de residuos entre cuyos objetivos figura la modernización antes de 2020 de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales que se encuentran en mal estado. El Comité de Examen de la Mortalidad Perinatal y Materna está elaborando en estos momentos su quinto informe anual, lo que permitirá comparar la situación en los diferentes países. Aunque la mortalidad materna suele estar a la par con la del Reino Unido y Australia, las tasas registradas en la población maorí y del Pacífico siguen siendo relativamente elevadas. El Comité de Examen investiga en la actualidad las razones que se esconden tras la elevada tasa de suicidio de esta población.

28. En la última década, el Gobierno ha triplicado el gasto en educación preescolar hasta los 6 años, lo que ha resultado en un aumento del 60% del número de niños matriculados en este nivel. El acusado aumento del gasto es consecuencia tanto de la atención prioritaria que se presta desde 2004-2005 al nivel de formación del personal de estos centros como de las subvenciones a las semanas escolares de 20 horas para niños de entre 3 y 4 años, lo que da a los padres de niños pequeños más libertad para realizar un trabajo remunerado.

29. Gracias a la intensificación de la labor de detección, en las últimas dos décadas los casos de cáncer de cuello de útero han disminuido en un 50% y la mortalidad se ha reducido en un 65%; el objetivo es lograr en 2014 que aumente al 80% la tasa de personas que se someten a pruebas de detección. Esta tasa sigue siendo inferior entre las comunidades maoríes y del Pacífico, pero se han puesto en marcha iniciativas de base destinadas específicamente a estos colectivos y se han lanzado campañas de información pública para poner fin a la disparidad. Si los miembros del Comité desean disponer de los datos desglosados de las pruebas de detección, pueden consultar el informe anual de la Unidad Nacional de Detección, en la página web del Gobierno de Nueva Zelanda.

30. Aunque la iniciativa del "pasaporte médico" ha paliado en gran medida los problemas de las personas con discapacidad intelectual que intentan acceder a los servicios de salud, un informe de 2011 del Ministerio de Salud reconoce que persisten deficiencias en la asistencia y la financiación. El Defensor del Pueblo también ha identificado en un informe la necesidad de mejorar los servicios de salud mental en las prisiones. El enfoque no institucionalizado de la salud mental supone una pesada carga para los funcionarios de prisiones, a quienes se exige cada vez más que atiendan a los reclusos con enfermedades mentales graves que anteriormente habrían ingresado en instituciones psiquiátricas seguras. Sin embargo, un informe reciente sobre el sistema penitenciario, preparado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha presentado dicho sistema en términos positivos en líneas generales.

31. Las consecuencias a largo plazo de las afecciones bronquiales y las enfermedades transmisibles siguen siendo un serio problema para las comunidades del Pacífico. Reconociendo la urgencia de este problema, el Primer Ministro ha incluido entre los diez objetivos fundamentales del sector público aumentar la vacunación de niños y la reducción de la incidencia de la fiebre reumática. En la práctica, esa decisión ha supuesto aumentar en 12 millones de dólares los fondos destinados al programa de la fiebre reumática, estrechar la cooperación con la sociedad civil en la construcción de modelos mejorados de atención y, en el marco del programa Whānau Ora, incrementar el número de servicios comunitarios maoríes y del Pacífico que puedan ofrecer una atención más adecuada y accesible.

32. Con el fin de facilitar la contratación y la retención de médicos rurales, el Gobierno se ha esforzado enormemente en mejorar los salarios y apoyar a los profesionales de la medicina que trabajan en zonas de baja densidad de población. Estos esfuerzos han dado su fruto en forma de redes nacionales de apoyo a neurólogos y oncólogos.

33. **La Sra. Power** (Nueva Zelanda) declara que la alta tasa de violencia doméstica en Nueva Zelanda ha sido fuente de preocupaciones y objeto de la política social desde hace muchos años. La campaña "It's not OK", actualmente en su quinto año, combina la publicidad en televisión, el apoyo a proyectos comunitarios, la defensa de la lucha contra este fenómeno en los medios de comunicación y una línea gratuita de información y asesoramiento. Su éxito a la hora de alentar el cambio de conductas y movilizar a las comunidades ha recibido el reconocimiento nacional e internacional, como el de la revista especializada *Trauma, Violence and Abuse*. Los estudios han concluido que, como resultado de la campaña, una de cada tres personas de la población general y casi una de cada dos personas en las comunidades maoríes y del Pacífico tomarán de ahora en adelante medidas para prevenir la violencia familiar.

34. El Equipo de trabajo para la acción sobre la violencia en las familias ha desarrollado una serie de indicadores para medir la violencia familiar y responder a estas tres preguntas: ¿se están agravando o mejorando los resultados?, ¿está aumentando o disminuyendo la incidencia general de la violencia familiar? y ¿hay señales de una menor tolerancia y de un cambio de conducta en todas las comunidades? El programa del Equipo de trabajo de 2011-2012 fijó unas acciones cuantificables en áreas como la promoción de la familia, la intervención precoz y la respuesta a las crisis. Aunque las tasas nacionales de casos de violencia familiar denunciados aumentaron en 2010 y 2011, la proporción de este delito descendió en el segundo año, lo que pone de manifiesto que aumentó el número de casos denunciados y no enjuiciados. No se acaban de entender completamente las razones de este cambio, pero entre ellas podría estar el cambio de actitud de la policía a raíz de la introducción de nuevas directrices sobre las órdenes de seguridad en 2010.

35. En todo el país, la violencia familiar es el centro de una amplia variedad de mecanismos, en su mayoría descritos en el informe. Entre ellos, destacan el Fondo de Servicios a la Familia, creado en 2011 para ayudar a las ONG en sus programas de apoyo y

defensa de las víctimas y los autores de actos de violencia doméstica; el Equipo Ministerial sobre la violencia en el Hogar, creado en 2008; y la Campaña de acción, que realiza una labor de base. Otras novedades son la creación en 2011 de una unidad especializada en violencia familiar, para respaldar la investigación de políticas, el desarrollo de servicios y la comunicación sobre iniciativas en materia de violencia familiar, y el servicio CLiC (Community Link in Courts), lanzado en 2010 para ofrecer apoyo a las víctimas y los autores de los actos de violencia familiar gracias a un enfoque integral que tiene en cuenta las drogas, el alcohol y las cuestiones económicas y de otra índole que contribuyen a la violencia familiar.

36. El Ministerio de Asuntos de la Mujer se ha fijado como prioridad la reducción de casos de violencia contra las mujeres con discapacidad desde que un estudio concluyera que cerca de un tercio de las víctimas adultas de la violencia sexual tiene algún tipo de discapacidad o deficiencia. El Equipo de trabajo para la acción sobre la violencia sexual trabaja para reducir los efectos de este fenómeno; preocupa especialmente que los refugiados a menudo no cuenten con las herramientas necesarias para atender a las personas con discapacidad. Este equipo de trabajo se ocupa también de asegurar la continuidad de la financiación de iniciativas fundamentales como los equipos de respuesta interorganismos que siguen los casos de violencia familiar denunciados ante la policía, los equipos de seguridad familiar que trabajan intensamente con familias en riesgo, las campañas que intentan influir en las conductas de la población maorí y del Pacífico por medio de los líderes comunitarios y el Centro de intercambio de información sobre la violencia en el hogar, encargado de recopilar y comparar datos sobre la violencia doméstica.

37. Las tasas de pobreza infantil han experimentado un descenso significativo en la última década, lo que refleja un aumento del empleo y los efectos del programa de créditos fiscales "Trabajar para las familias". Dicho programa fue diseñado para reducir la dependencia de las prestaciones, reconocida como uno de los principales factores que contribuyen a la pobreza y que afecta a cerca del 60% de los niños pobres. Muchas familias que dependen de las prestaciones son monoparentales, razón por la cual uno de los principales objetivos del conjunto de reformas del estado de bienestar lanzado en 2011 con el título de "Planteamiento futuro", ha sido ofrecer una combinación de desgravaciones fiscales, formación y educación inicial gratuita para compensar la retirada de prestaciones directas y para que el empleo sea una opción viable para esas familias. Los resultados de este programa indican que, con una gestión diligente de los casos, la mayoría de participantes reciben formación o consiguen un empleo remunerado en el plazo de seis meses. El Gobierno está comprometido con las familias monoparentales, pero está igualmente convencido de que a partir de ahora el objetivo de la política debe ser la formación y la integración en el mercado laboral y no el pago de prestaciones directas; una nueva ronda de reformas debatida actualmente en el Parlamento prevé conceder en las prestaciones sociales según un criterio basado en la inversión, con arreglo al cual la prioridad será identificar e invertir en aquellas personas con mayor riesgo lo antes posible para así reducir al mínimo el período de dependencia de las prestaciones. Este criterio es también el elemento central de la política del Gobierno para reducir la pobreza infantil.

38. Recientemente, se ha formado un comité ministerial que presentará un informe sobre la pobreza infantil cada seis meses.

39. **El Sr. Smith** (Nueva Zelanda) manifiesta que la legislación neozelandesa no establece ninguna edad mínima específica para poder trabajar. Sin embargo, el marco jurídico vigente ofrece una amplia protección contra el empleo excesivo o en condiciones de explotación: la Ley de educación exige que los niños asistan a la escuela hasta los 16 años, con tan solo unas pocas excepciones, y prohíbe el empleo de los menores de 16 en horario lectivo; el Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo restringe el acceso a lugares de trabajo peligrosos a los menores de 15 años y prohíbe el trabajo

nocturno a los menores de 16; la Ley de reforma de la prostitución tipifica como delito organizar o recibir servicios sexuales de menores; y la Ley sobre la venta de bebidas alcohólicas prohíbe la venta de alcohol en establecimientos autorizados a los menores de 18. Aunque según las investigaciones realizadas aproximadamente el 40% de los niños en edad escolar trabajan a tiempo parcial, este trabajo suele ser seguro y estar razonablemente bien remunerado, las horas laborales son limitadas y no hay pruebas de que perjudique el rendimiento escolar.

40. **El Sr. Keith** (Nueva Zelanda) declara que los indicadores clave de la salud de los maoríes, como la esperanza general de vida, han mejorado en los últimos veinte años y que se han reducido sensiblemente las diferencias con la media nacional. Las tasas de vacunación infantil en las comunidades maoríes siguen en ascenso y recientemente han superado la media nacional de 2005. Las juntas de salud de distrito tienen la obligación legal de mejorar los índices de salud de los maoríes y otros grupos desfavorecidos, de acuerdo con la Ley de salud pública y discapacidad de 2000; además, en virtud de una enmienda de 2011, tienen que informar periódicamente de la evolución de una serie de 15 indicadores de salud específicos y vincular las medidas clave adoptadas para reducir las disparidades con las mejoras en dichos indicadores.

41. **El Sr. Schrijver** dice estar menos preocupado por las repercusiones del empleo en el rendimiento escolar que por la correlación entre la relativamente elevada tasa de abandono escolar y la incidencia del trabajo infantil, fundamentalmente en la economía informal.

42. **El Sr. Abdel-Moneim** agradecería más información sobre la política fiscal y su repercusión en la igualdad de ingresos y el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado, así como sobre el índice de precios al consumo.

43. **La Sra. Shin Heisoo** solicita más información sobre el proyecto de ley de reforma de la seguridad social que tramita actualmente el Parlamento. Las informaciones sugieren que el proyecto de ley pretende aplicar criterios generales de edad y de estado civil a la concesión de las prestaciones sociales que podrían ser discriminatorios por sus efectos en los jóvenes, especialmente en las mujeres maoríes con niños pequeños. Defiende un planteamiento de derecho basado en la evaluación de las necesidades individuales.

44. **El Sr. Keith** (Nueva Zelanda) dice que la tasa de abandono escolar ha descendido sensiblemente desde 2008 y que en la actualidad el 84% del alumnado de 17 años siguen asistiendo a la escuela. Solo se permiten excepciones a la edad legal de 16 años para abandonar los estudios cuando los adolescentes en cuestión desean seguir otra vía de formación, como un aprendizaje, durante al menos seis meses. Un servicio mejorado de prevención del absentismo escolar trabaja sin descanso para identificar las causas subyacentes a las ausencias injustificadas con las familias, las escuelas y los servicios sociales y ha logrado reducir las ausencias y el absentismo escolar. También se han diseñado varios programas que tratan de poner fin al fenómeno de los adolescentes que se desentienden del sistema educativo inculcándoles la autoestima y desarrollando su identidad cultural.

45. **La Sra. Power** (Nueva Zelanda) declara que el proyecto de ley de reforma de la seguridad social que se tramita actualmente afectará solamente a un reducido grupo de personas que el Gobierno considera particularmente vulnerables: los jóvenes, muchos de ellos padres adolescentes, expulsados del entorno familiar. El Gobierno cree que el elevado riesgo de dependencia y exclusión a largo plazo al que se exponen estos adolescentes justifica la rigurosidad de las medidas propuestas, aunque reconoce que dichas medidas pueden ser contrarias a las opiniones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En cualquier caso, se aplicará un régimen menos rígido a los

adolescentes que demuestren capacidad para gestionar sus recursos y que asistan regularmente a clases de paternidad.

Artículos 13 a 15

46. **El Sr. Marchán Romero** pregunta si la delegación dispone de información más detallada sobre el calendario de publicación de las recomendaciones resultantes de la investigación del caso Wai 262 y si la decisión del Gobierno de suscribir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas tendrá repercusiones en la aplicación de las recomendaciones. También desea poner de relieve una aparente contradicción en la política cultural del Gobierno. Aunque el párrafo 640 del informe afirma que se sigue propiciando el modelo no intervencionista, se podría deducir del apartado relativo a Tokelau, territorio del Pacífico meridional, que, al inculcar la idea importada de individualidad, el Gobierno está alentando el distanciamiento respecto de los valores tradicionales y los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas.

47. **El Sr. Kerdoun** dice que el informe indica que la elevada tasa de abandono escolar es un problema que se limita casi exclusivamente a las comunidades maoríes y del Pacífico. Asimismo, recalca las diferencias entre esos grupos y la población europea y que, al parecer, las diversas medidas adoptadas para resolver la cuestión no han logrado introducir ninguna mejora apreciable. Por eso, quisiera saber si la delegación tiene pruebas de que estas iniciativas están consiguiendo el objetivo inicial y si considera que la política general del Estado parte para prevenir el abandono escolar temprano ha dado sus frutos.

48. También desearía conocer la opinión de la delegación sobre los motivos por los que el rendimiento escolar de los estudiantes maoríes y del Pacífico es por lo general inferior y es mayor la probabilidad de que estos estudiantes abandonen estudios prematuramente. ¿Se debe ello a que no están bien integrados? Y, de ser así, ¿por qué no lo están? ¿Es el uso de las lenguas indígenas un obstáculo? Además, desearía disponer de más información sobre el Programa de Estudios de Nueva Zelanda introducido en febrero de 2010 y sus efectos. Por último, en vista que, al parecer, el programa de educación de la primera infancia Te Whāriki contempla la idea de la educación en derechos humanos, pregunta cuándo se introdujo el programa, cómo se enseñan a los niños pequeños los principios de derechos humanos y si su inclusión ha tenido algún efecto demostrable.

49. **La Sra. Shin Heisoo** pregunta si el acoso escolar es una cuestión social apremiante en Nueva Zelanda y, de ser así, si se han investigado sus causas y su alcance.

50. **Al Sr. Abashidze** le preocupa que, al parecer, la Oficina de Asuntos Étnicos agrupa los segmentos de población según criterios más raciales que étnicos. Desearía saber si la Oficina elabora también estadísticas sobre determinados grupos étnicos, si hay leyes o programas específicos que garantizan a dichos grupos el ejercicio de sus derechos culturales y si existe algún sistema que permita destinar recursos presupuestarios a determinados grupos étnicos.

51. **El Sr. Abdel-Moneim** manifiesta que las cifras del gasto en educación presentadas en el párrafo 556 del informe indican que, si bien en la última década se ha doblado el gasto en términos absolutos, ha aumentado en menos del 2% en términos porcentuales. Las cifras del gasto como proporción del producto interno bruto también revelan un escaso aumento porcentual. Dada la insuficiencia de estos incrementos, se pregunta si ha interpretado correctamente las cifras.

52. También le preocupa la falta de datos en el informe sobre el coste de la educación. A este respecto, habrían sido útiles las cifras sobre el número de escuelas y universidades privadas en relación con el de instituciones públicas, puesto que, si se expande el sector privado a la vez que desciende el número de escuelas públicas en términos relativos, la

educación se encarece irremediamente. Agradecería los comentarios de la delegación sobre estas observaciones y sus aclaraciones sobre una aparente contradicción en el párrafo 594, que afirma que las becas cubren los primeros 3.000 dólares de tasas anuales de matrícula, pero que los beneficiarios deben abonar los primeros 1.000 dólares de los costos anuales del curso.

53. **El Sr. Keith** (Nueva Zelanda) declara que el informe del Tribunal de Waitangi sobre la investigación del caso Wai 262 se publicó en julio de 2011. Dado que el informe de 700 páginas contiene numerosas conclusiones y recomendaciones de gran alcance, el Gobierno necesitará tiempo para estudiar su contenido y dar a conocer su respuesta formal. Aunque el informe es muy anterior a la decisión del Gobierno de Nueva Zelanda de suscribir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el documento invoca dicha declaración como punto de partida por su relevancia para la interpretación de los derechos culturales en teoría y en la práctica.

54. A su juicio, no hay contradicción alguna entre la perspectiva colectiva tradicional de Tokelau y la relativamente nueva perspectiva individual basada en los derechos que se promueve a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Es cuestión simplemente de conciliar la perspectiva de Tokelau sobre el derecho y las relaciones sociales, según la cual las personas tienen un deber para con su comunidad, y el Estado parte tiene la obligación paralela de garantizar a todos sus ciudadanos el disfrute del conjunto de derechos humanos. Ese proceso de conciliación es una pieza central de la transición actual hacia una mayor autonomía del territorio.

55. La mayor parte de la educación en Nueva Zelanda es pública o tiene financiación pública. Algunas escuelas, especialmente de la etapa preescolar, son de titularidad privada, pero la mayoría de sus gastos de funcionamiento, por no decir todos, corren por cuenta del Estado. En los últimos años, no se ha registrado ningún aumento significativo de la provisión para la educación privada. De hecho, las dificultades económicas han puesto en una situación delicada a muchas escuelas privadas y se han producido movimientos hacia la incorporación de algunas de esas escuelas con problemas al sistema público. No existen universidades privadas y el Estado hace frente a la mayor parte de los gastos de funcionamiento de las pocas instituciones de educación superior de propiedad privada que existen en el país.

56. Existen diversos programas de becas para facilitar el acceso a la educación superior, si bien cree que el programa mencionado por el Sr. Abdel-Moneim ya no está vigente. Por ejemplo, los estudiantes de medicina pueden recibir becas siempre que acepten trabajar en comunidades rurales durante un tiempo determinado tras graduarse. Sin embargo, los costes de vida se sufragan fundamentalmente con las ayudas de estudiante que se otorgan una vez determinados los medios de vida. También existen préstamos para estudiantes en condiciones ventajosas. Los costes de educación que los estudiantes deben sufragar por cuenta propia por vía de pagos directos o préstamos representan de media una tercera parte del coste total.

57. Desde 1996, los principios de derechos humanos forman parte del programa de educación de la primera infancia Te Whāriki. Cada institución tiene libertad para decidir la forma de aplicar el programa en la práctica, aunque las actividades basadas en la diversidad y en las diferentes necesidades suelen ser una herramienta clave. La importancia que se concede a los derechos humanos queda reflejada en la formación que el personal de educación preescolar debe completar a fin de obtener la cualificación profesional necesaria.

58. Aunque el gasto del Gobierno en educación haya aumentado escasamente en términos porcentuales, la cifra del gasto absoluto en dólares supone un aumento de cerca del 50% una vez ajustada a la inflación, lo que refleja un incremento significativo del poder adquisitivo.

59. **La Sra. Power** (Nueva Zelandia) dice que el acoso escolar es un serio problema en Nueva Zelandia y que el país ha sufrido varios suicidios trágicos relacionados con este fenómeno. El conjunto de medidas de salud mental de 62 millones de dólares destinado a los jóvenes, que el Primer Ministro ha anunciado recientemente, debería garantizar el respaldo y la asistencia que sin duda se necesitan.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.